

CONTESTACION DEMANDA**DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ** <edamaris@hotmail.com>

Jue 10/06/2021 4:23 PM


Para: Juzgado 04 Administrativo - Cauca - Popayan <j04admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co> 4 archivos adjuntos (2 MB)

CONTESTACION AMERICO.pdf; PODER AMERICO.pdf; 1.CEDULA DE CUIDADANIA (1).pdf; 2.ACTA POSESION (1) (1).pdf;

Doctora:

CARMEN YANETH ZAMBRANO HINESTROZA**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**E. S. D.**EXPEDIENTE:** 190013333004 2020 00035 00**DEMANDANTE:** AMÉRICO NAVIA ORDÓÑEZ Y OTROS**DEMANDADO:** MUNICIPIO DE POPAYÁN y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DIRECTA

DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 34.319.760 de Popayán y tarjeta profesional de Abogada No. 168.611 del C.S de la J. en mi calidad de apoderada judicial del Municipio de Popayán de conformidad con el poder que anexo a la presente y que me fuera otorgado por parte del Señor Alcalde de la ciudad de Popayán, entidad distinguida con el número de identificación tributaria No. 891.580.006-4, con dirección electrónica para notificaciones al correo edamaris@hotmail.com, me permito contestar la demanda, encontrándome a término para ello mediante documento adjunto.

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

Doctora:

CARMEN YANETH ZAMBRANO HINESTROZA

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 190013333004 2020 00035 00

DEMANDANTE: AMÉRICO NAVIA ORDÓÑEZ Y OTROS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE POPAYÁN y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 34.319.760 de Popayán y tarjeta profesional de Abogada No. 168.611 del C.S de la J. en mi calidad de apoderada judicial del Municipio de Popayán de conformidad con el poder que anexo a la presente y que me fuera otorgado por parte del Señor Alcalde de la ciudad de Popayán, entidad distinguida con el número de identificación tributaria No. 891.580.006-4, con dirección electrónica para notificaciones al correo edamaris@hotmail.com, me permito contestar la demanda, encontrándome a término para ello en los siguientes términos:


I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

La defensa judicial del Municipio de Popayán, muy respetuosamente, se opone a las pretensiones de la demanda en el referido proceso y consecuentemente a todas las declaraciones y condenas solicitadas en por el actor, frente a las pruebas aportadas en la demanda, el Municipio de Popayán se opone a cualquier responsabilidad que se le indilgue

por ocasión de los hechos narrados por el demandante, toda vez que no se vislumbra los elementos constituidos de responsabilidad definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado.



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

II. EXCEPCIONES

1.- INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL


Teniendo presente la ausencia de nexo causal como elemento esencial para que se configure el daño antijurídico, se demuestra que el Municipio de Popayán no tiene competencia directa, ni injerencia por acción u omisión administrativa sobre los supuestos perjuicios causados a los demandantes toda vez que el vehículo que se relaciona en los hechos de la demanda es de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, por lo cual no se configura ningún nexo causal en tanto no existe conexidad entre el daño y el actuar del ente Municipal, toda vez que el actuar de la Entidad Territorial en el presente asunto va ligado a la vinculación entre la causa y el efecto. De esta manera, la actuación o la omisión de la administración Municipal y el daño que se alega demuestra inexistencia de una relación de causalidad o nexo causal entre la actividad de un sujeto (activa u omisiva) y el resultado dañoso, requisito ineludible para el nacimiento de la responsabilidad civil, es decir, un requisito imprescindible para la viabilidad de la pretensión indemnizatoria solicitada por el actor,

En este orden de ideas, el nexo causal no surge de la conducta u omisión de la Entidad Territorial rompiendo así los presupuestos necesarios constitutivos de responsabilidad.

2.- LEGITIMACION DE LA CAUSA POR PASIVA

Solicito respetuosamente al Honorable Señor Juez declarar probada la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de declaración y condena consistentes en la reparación del daño antijurídico causado a los actores, no se encuentran dentro de las competencias del Municipio de Popayán. La legitimación en la causa por pasiva, es un presupuesto procesal derivado de la capacidad para ser parte. Es una facultad que le asiste, para ostentar dicha calidad y, por ende, formular unas pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo sustancial o contradecirlas y oponerse a ellas. En el presente asunto se vislumbra la falta de conexión entre la parte demandada y la situación fáctica constitutiva del litigio; así, quienes están obligados a concurrir a un proceso en calidad de demandados son aquellas personas que participaron realmente en los hechos que dieron lugar a la demanda.



	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. En tal orden, cabe destacar que no existe vínculo entre el daño y la actividad de la administración Municipal, por lo cual se fundamenta la excepción solicitada.

3. LA INNOMINADA GENERICA.

Solicito al Señor Juez sea declarada la excepción que a su juicio corresponda.

4. FRENTE A LOS HECHOS

HECHO PRIMERO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO SEGUNDO: No me consta.

HECHO TERCERO: Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO CUARTO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO QUINTO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO SEXTO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO SÉPTIMO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO OCTAVO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO NOVENO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO DÉCIMO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO UNDÉCIMO: No me consta.

HECHO DÉCIMO SEGUNDO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO DECIMO TERCERO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO DECIMO CUARTO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO DECIMO QUINTO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO DECIMO SEXTO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO DÉCIMO SÉPTIMO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO DÉCIMO OCTAVO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.


HECHO DÉCIMO NOVENO: No me consta. Me atengo a lo probado en el proceso.

HECHO VEINTE: No me consta.

HECHO VEINTIUNO: No me consta.



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

HECHO VEINTIDÓS: No me consta.

HECHO VEINTITRÉS: No me consta.

HECHO VEINTICUATRO: No me consta.

HECHO VEINTICINCO: No me consta.

HECHO VEINTISÉIS: No me consta.

5. FRENTE A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los asuntos de responsabilidad del Estado (tanto contractual como extracontractual), deben ser resueltos a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, que consagra el principio general y superior sobre el tema y que facilitó el camino en la tarea de imputación jurídica de los resultados que se refutan dañinos, dadas las teorías que hasta 1991 se habían elaborado, con criterios de agrupación casuística.

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...”

Bajo el precepto constitucional, se impone la necesidad de definir los siguientes postulados: I) que el daño sufrido por la víctima fue causado por la entidad demandada, II) que le es imputable a dicha entidad, y III) que tiene el carácter de antijurídico, presupuestos que doctrinalmente han resumido en dos: la imputabilidad y el daño antijurídico, siendo los que debe probar el actor en procura de la prosperidad de las pretensiones.


La jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina “indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable presumir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico”.

No es cierto que el Municipio de Popayán sea responsable de los perjuicios materiales y morales ocasionados a la demandante por carencia de sustento legal, probatorio y jurisprudencial.

Respectado juez, de esta manera no se encuentra demostrado el nexo causal que permita



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

endilgar responsabilidad a la Entidad demandada Municipio de Popayán, elemento que es determinante o el más importante en la configuración del daño antijurídico. Quien pretende la acción resarcitoria por responsabilidad extracontractual del estado, según reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado debe demostrar los siguientes elementos.

1. Un mal funcionamiento del servicio que corresponde a la administración incluyendo dentro de este concepto el funcionamiento tardío, el deficiente y su no prestación.
2. Que se causó un perjuicio.
3. Que existe una relación de causalidad entre el perjuicio y el mal funcionamiento.

Sentencia 1683 de noviembre 24 de 1989, sala de lo contencioso Administrativo, Sección tercera, Gustavo de Greiff Restrepo.

El concepto técnico de daño o lesión, a efecto de la responsabilidad civil, requiere pues, un perjuicio patrimonialmente evaluable, ausencia de causas de justificación (civiles), no en su comisión sino en su producción respecto al titular del patrimonio contemplado y finalmente, posibilidad de imputación del mismo a tercera persona.

La acción de reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, se encuentra establecida para obtener el resarcimiento de los perjuicios derivados de un hecho administrativo que implique una falla en el servicio, gran parte del presupuesto necesario para la prosperidad de dicha acción se encuentra en la actividad probatoria tendiente a demostrar que el hecho existió, las responsabilidades y consecuencias del mismo y el nexo causal.


La teoría de la falla o falta del servicio se fundamenta en la culpa del estado, está la tiene que probar para que se predique y declare la responsabilidad, en este sentido la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

Para derivar responsabilidad estatal, es necesario que se den los siguientes presupuestos:

- a. “Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia. La falta o la falla que se trata no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración.
Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se concluye los actos ajenos de agente ajenos al servicio, ejecutados como simples ciudadanos.



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

- b. Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.
- c. Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio no habrá lugar a la indemnización".

Para que la responsabilidad de la administración sea declarada, no es suficiente que exista un daño antijurídico, sino que es menester, además que dicho daño sea imputable, vale decir, atribuible jurídicamente al Estado y en el caso de que nos ocupa, el daño por el cual se predica se ha causado a los accionantes, no le deriva ninguna responsabilidad patrimonial al Municipio de Popayán.

La regla primordial del derecho de responsabilidad es aquella que manifiesta "sin perjuicio no hay responsabilidad". La existencia de la prueba del perjuicio es tal trascendencia que su ausencia implica la imposibilidad de pretender la declaratoria de responsabilidad.

Esta regla se encuentra ratificada por nuestra jurisprudencia la cual enuncia que el "el daño constituye un requisito de la obligación de indemnizar y el no demostrarse como elemento de la responsabilidad estatal, impide que esta se estructure. La regla básica establecida es que el daño debe ser probado por quien lo sufre, so pena de que proceda su indemnización. Sobre el nacimiento de la obligación de reparar, Rodrigo Escobar Gil, señala:


"...Para el nacimiento de la obligación de reparar no basta solo la imputatio facti; es decir, la relación de causalidad entre un hecho y un daño, sino que es necesario la imputatio juris, esto es, una razón de derecho que justifique que la disminución patrimonial sufrida por la víctima se desplace al patrimonio del ofensor. (Teoría general de los contratos de la administración pública, legis p. 259).

En el proceso objeto de estudio, no hay prueba de la existencia de la falla en servicio, es decir de la responsabilidad que se predica del Municipio de Popayán, constituyéndose en elementos indispensables para endilgar la misma.

Es así, como en este caso no se encuentra demostrado el nexo causal que permita endilgar responsabilidad al Ente Territorial, elemento que es determinante o el más importante para la configuración del daño antijurídico.



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Daños causados por particulares exigen de prueba para responsabilizar al Estado.

“En efecto, no le son imputables a las autoridades públicas, los daños a la vida o bienes de las personas cuando son causados por los particulares, en consideración a que las obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”. En tales condiciones es evidente la ausencia de pruebas que permitan siquiera vislumbrar un indicio de responsabilidad en cabeza de la demandada, lo que sin duda constituye una falta al deber de la carga de la prueba, presupuesto fundamental en este tipo de acciones. Como ya se mencionó en las consideraciones de esta providencia, el Estado está llamado a responder patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, entre otros casos, cuando una persona solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra, o cuando no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones.


El Consejo de Estado, ha sostenido que el Estado es responsable por los daños antijurídicos causados a los ciudadanos como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas, siempre que estos daños le sean imputables, lo que implica que el Estado no responde por todos los daños antijurídicos que sufran las personas, causados por terceros, por cuanto sus obligaciones son relativas al estar limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan.

En efecto, para atribuir responsabilidad al Estado, es preciso demostrar que el daño le es Imputable a éste, siendo posible en algunos eventos, que la imputabilidad resulte del incumplimiento por parte de la Administración de su deber de protección frente a los ciudadanos, ante la comisión de un acto terrorista. Al respecto en reciente jurisprudencia, el Consejo de Estado explicó:

“El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles. (Subrayado fuera de texto)



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la Corporación, bajo dos títulos básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. Tales criterios están vinculados, obviamente, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido éste su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.


Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a éste, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados; o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando éstas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones..."

Es claro, que dentro del régimen de imputación de responsabilidad subjetiva por falla del servicio, la imputabilidad, puede resultar del incumplimiento por parte de la administración, de su deber de protección frente a los ciudadanos, como cuando uno de ellos se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce, sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente dadas las circunstancias particulares del caso, siendo éstas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber estatal.

Como marco normativo, sustento de dicha responsabilidad, ha referido el artículo segundo Constitucional, en el cual se plasma el deber de las autoridades de la república de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, deber general y abstracto que "...se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado.

En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la



	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a éstas. Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación 16234 de 27 de marzo de 2008.

En este sentido, el análisis de responsabilidad bajo el título jurídico de falla del servicio, requiere de la concurrencia de estos elementos: (i) El desconocimiento por acción u omisión a deberes constitucionales, legales, reglamentarios o administrativos por parte del Estado que correlativamente implican derechos de los administrados, en situaciones concretas previsibles. (ii) El daño, cierto, particular, anormal, a las personas que solicitan reparación, a una situación jurídicamente protegida por el Estado. (iii) El nexo de causalidad adecuado, determinante y eficiente, entre el daño y la conducta irregular del Estado.

Ahora bien, frente a la responsabilidad del Estado por omisión, el Consejo de Estado, en Jurisprudencia de 15 de agosto de 2007, Magistrada ponente, Ruth Stella Correa Palacio, precisó:


“En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño.

De acuerdo con lo anterior no es procedente endilgar responsabilidad al Municipio de Popayán toda vez que no tiene obligación alguna, debido a que el vehículo que se relaciona en los hechos de la demanda es de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, por lo cual no se configura ningún nexo causal en tanto no existe conexidad entre el daño y el actuar del ente Municipal.

6. FRENTE A LAS PRUEBAS

La defensa judicial del Municipio no se opone a las pruebas documentales aportadas y solicitadas por el demandante, por lo tanto, sírvase su señoría, tener como tales las que obran en el expediente, y decretar las pruebas solicitadas.



	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1

1. Sírvase Señor oficial a la Secretaría de Tránsito Municipal de Popayán para que alleguen todo el expediente administrativo contenido en el accidente de tránsito ocasionado el día 5 de marzo de 2018 al señor AMERICO NAVIA ORDOÑEZ.
2. Sírvase señor juez llamar a interrogatorio de parte al señor JAMES EMILIO FERNANDEZ ACOSTA, conductor del vehículo implicado en el accidente con el fin que exponga sobre los hechos materia de la demanda, ubicable a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.

7. ANEXOS

1. Poder conferido por parte del Señor Alcalde de la ciudad de Popayán.
2. Anexos del poder.

8. NOTIFICACIONES

Al Municipio de Popayán en la carrera 6 No. 4.21 Edificio CAM, correo electrónico: notificacionesjudiciales@popayan.gov.co

La suscrita al correo electrónico edamaris@hotmail.com

De la Honorable Juez con todo respeto,




DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ

T.P. No. 168.611 del C.S.J.

C.C. 34.319.760 POP.



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión 07
		Página 1 de 2

Doctora:

CARMEN YANETH ZAMBRANO HINESTROZA

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN

E. S. D.


EXPEDIENTE: 190013333004 2020 00035 00

DEMANDANTE: AMÉRICO NAVIA ORDÓÑEZ Y OTROS


DEMANDADO: MUNICIPIO DE POPAYÁN Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON, mayor de edad, vecino de la ciudad de Popayán, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN,, por medio del presente escrito me permito manifestar a Usted, que confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente a la abogada **DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.319.760 de Popayán y con Tarjeta Profesional No. 168.611 del C. S. de la J., con dirección electrónica para notificaciones edamaris@hotmail.com para que represente judicialmente y ejerza la defensa de los intereses jurídicos y económicos del Municipio, dentro del proceso de la referencia. La apoderada queda facultada para sustituir, desistir, renunciar, reasumir, presentar recursos en todas las instancias, conciliar conforme a las directrices impartidas por el Comité de Conciliación, aportar toda clase de documentos pertinentes para la defensa de la entidad o tachar de falsos los que a su juicio le sean, y en general para adelantar cuanto esté a su alcance tendiente al correcto cumplimiento del mandato conferido en los términos del Artículo 77 de la Ley 1564 de 2012.


 JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
 C.C. 10.534.142 de Popayán
 Alcalde de Popayán

Acepto,


 DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ
 C.C. No. 34.319.760 de Popayán
 T. P. No. 168.611 del C. S. J.



**Creo en
POPAYÁN***

ACTA DE POSESION DEL SEÑOR ALCALDE DE POPAYAN

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:00 de la mañana (10:00 a.m.), en el Parque de Caldas de la ciudad de Popayán, compareció ante mí MARIA DEL ROSARIO CUELLAR DE IBARRA, Notaria Segunda del Círculo de Popayán, el Doctor JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON, identificado con la cédula de ciudadanía 10.534.142 de Popayán, para tomar posesión del cargo de ALCALDE MUNICIPAL de la ciudad de Popayán, para el cual fue elegido según consta en credencial expedida por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal el 31 de octubre de 2019.

Acto seguido, la Señora Notaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 136 de 1994 le recibe el juramento de la siguiente manera: "Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las Ordenanzas y los Acuerdos", a lo cual el posesionado respondió "Sí juro", la señora Notaria manifestó "Si así lo hiciere Dios y la patria se lo premien y sino él y ella os lo demanden".

El posesionado exhibió los siguientes documentos:

Cédula de ciudadanía

Libreta Militar No.

Certificado de antecedentes disciplinarios

Certificado de medidas correctivas

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes penales

Credencial expedida por los Miembros de la Comisión Escrutadora Municipal el 31 de octubre de 2019.

Declaración juramentada de bienes y rentas (Ley 190 de 1995) de él, su esposa e hijo no emancipado.

La presente posesión surte efectos fiscales a partir del primero (1) de enero de dos mil veinte (2020).

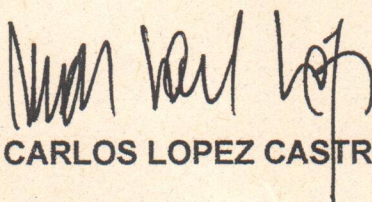
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y una vez leída y aprobada la presente acta es firmada por los que en ella intervinieron.

La Notaria



MARIA DEL ROSARIO CUELLAR DE IBARRA

El Posesionado



JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.534.142**

LOPEZ CASTRILLON
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

Juan Carlos López
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
POPAYAN
(CAUCA)

04-ABR-1959

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

A+

M

ESTATURA

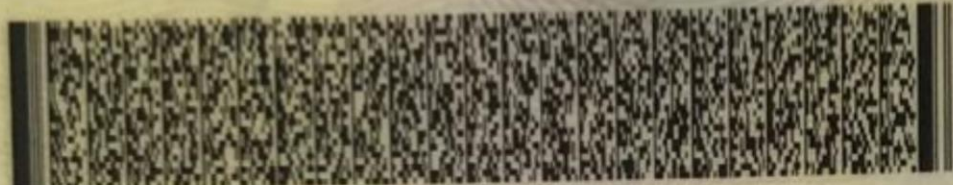
G.S. RH

SEXO

27-JUL-1977 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500130-70160021-M-0010534142-20071203

0000407337L 02 242070846